

VIENTO

POR UNA IZQUIERDA ALTERNATIVA

SUR

● **El sexo sin los ángeles.** J. A. Nieto, R. Osborne, F. Pereña ● **Centroamérica. El Huracán, los pobres, los ricos...** Fernando Cardenal, Orlando Núñez ● **Italia. De Prodi a D'alema.** Livio Maitán ● **Indonesia. Los muertos de Habibie.** Max Lane ● **¿Del neoliberalismo a la depresión?** R. Brenner ● **Alemania. Los "rojos-verdes" en el gobierno.** A. Klein, W. Wolf ● **Gran Bretaña. La izquierda laborista sorprende a Blair.** N. Murray ● **Brasil. Victoria de la izquierda en Rio Grande do Sul.** E. Herrera, M. Rossetto ● **Chile. Más allá de "Pinochile".** A. Pagán, Lilia Díaz ● **Euskadi. Los días después.** R. Zallo, J. R. Castaños, O. Matute, R. Díez, J. Elorrieta, I. Uribarri, P. Idoyaga, J. Iriarte, S. Cuadra



Chile

Pinochet, Pinochile

Alberte Pagán

La detención en Londres del general retirado, ex-jefe de Estado y senador vitalicio Augusto Pinochet el pasado 16 de octubre nos sirvió para recuperar un pedazo de historia semi-olvidado y para desvelar el auténtico estado de las cosas en Chile, un país en el que, ahora como antes, no se mueve una hoja sin el conocimiento del ex-dictador.

El desarrollo jurídico del caso no tiene mayor importancia que las consecuencias políticas que se desprenden de él (y para delatar a los auténticos pinochetistas de hoy día). El hecho de que la justicia española tenga o no competencia para procesarlo, de que exista o no un delito de genocidio, de que lo ampare o no la inmunidad (a punto he estado de escribir "impunidad") diplomática no dejan de ser detalles que desaparecen ante las enormes implicaciones políticas de la detención.

Sea o no extraditado, salga o no absuelto, se le reconozca o no la inmunidad, el juicio político ya está en marcha.

"Genocidio" puede perder su acepción estrictamente genética para poder significar (intento de) eliminación total o parcial de grupos humanos diferenciados, como pueden ser grupos (opositores) políticos. Para quien no se quede satisfecho con esta jurídicamente posible acepción, tenemos la denuncia presentada el 3 de noviembre pasado ante la Embajada del Reino Unido en Santiago de Chile por la asociación mapuche urbana Meli Wixan Mapu y por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Línea Fundadora. La acusación: genocidio en contra de la etnia mapuche. Las pruebas: lista de más de 300 detenidos desaparecidos y ejecutados. Con tal masacre se pretendía descabezar al movimiento mapuche como grupo político opositor a la vez que como grupo cultural y religioso diferenciado. En cuanto a la impunidad o prescripción de los delitos, hay que tener en cuenta que, por definición, todos los detenidos desaparecidos siguen ausentes, por lo que no existe una fecha de finalización del delito, delito que continúa existiendo hoy en día cuando la impunidad del acusado por su condición de jefe de Estado ha prescrito. Cobertura jurídica y judicial para procesarlo no falta; sólo se necesita un poco de voluntad política.

Uno mira siempre con desconfianza esta injerencia extranjera en los asuntos internos de los Estados, cuando por norma general se lleva a cabo incumpliendo las normativas internacionales y en contra de los países que se oponen a la hegemonía estadounidense. El caso Pinochet es diferente: antiguo aliado de los gobiernos de EE UU y del Reino Unido, es un juez y una acusación particular (y no un Estado o su gobierno) quien provoca su detención como responsable de ciertos crímenes cometidos durante su dictadura. La defensa de Pinochet en ningún momento ha negado los cargos, con lo que su culpabilidad como responsable máximo es obvia. Por una vez que la legislación internacional permite atacar el fascismo neoliberal hay que continuar hasta las últimas consecuencias.

Pero puestos a buscar responsabilidades habría que sentar en el banquillo a los auténticos promotores del golpe de 1973: el gobierno de Estados Unidos con la

ayuda de sus servicios de inteligencia y de la derecha y la Democracia Cristiana chilenas. Sabemos que eso no va a suceder, y de ahí la pequeña desilusión de que todo se reduzca a la condena (carcelaria o política) de un viejo dictador para apaciguar las conciencias mientras Estados Unidos sigue asesinando masivamente en cuanto país se le antoje y mientras ese importante sector de la sociedad chilena que apoyó y apoya la represión, la tortura y los asesinatos políticos sigue afianzándose en su poder. Entre ellos, responsables directos de torturas y asesinatos durante el gobierno militar que ahora gozan de altos puestos en el ejército y en las instituciones del Estado (el general Fernando Torres Silva, auditor general del ejército; Rodolfo Stange, senador de la Unión Demócrata Independiente [UDI]). Por lo tanto, la detención de Pinochet, a pesar de la gran alegría que nos ha producido, no significa el fin de la impunidad.

Un juicio imposible

En Chile se ha iniciado una investigación de los crímenes de los que se acusa a Pinochet para así poder solicitar su extradición al Reino Unido para presuntamente juzgarlo en su país, juicio que sabemos que nunca tendrá lugar. Porque el Comandante en Jefe Benemérito del Ejército chileno dejó bien atada su supervivencia física y política, imponiendo una Constitución y una legislación a su medida. Ahí está la inconstitucionalidad de su nombramiento como senador vitalicio (ya que nunca desempeñó el cargo de presidente electo); ahí están las leyes de autoamnistía, ahí está el Senado ocupado por militares y pinochetistas (nombrado y vitalicios) antidemocráticamente. Todo el país se está volcando en la defensa de su dictador como si el futuro del mismo Chile estuviese en peligro. Como si Chile fuese Pinochet, Pinochet Chile. No se puede entender el país desde 1973 sin la figura del senador vitalicio. La derecha chilena, aglutinada en torno al ex-dictador, es amplia y poderosa. Y sus antiguos enemigos (el Partido Socialista [PS], por ejemplo), aliados ahora con la otra derecha golpista (la Democracia Cristiana [DC]), ambiguamente no acaban de aplaudir la decisión del Reino Unido de detener a Pinochet. La argumentación es que el mantenimiento de la frágil transición es más importante que el fin de la impunidad (aderezado con una pizca de pseudo-anticolonialismo). Es un argumento que desvela por dónde van los tiros en lo que a política chilena se refiere: la derecha más abiertamente pinochetista gobierna desde la oposición. El gobierno tiene que aceptar pactos impuesto por el tremendo poder de la derecha, que continúa vencedora. La pregunta es: ¿por qué la detención de un individuo provoca la mayor crisis política en la sociedad chilena desde noviembre de 1973? Porque Pinochet es Chile. Si la poderosa maquinaria de la derecha sigue ciegamente las directrices de Pinochet (como se pudo observar cuando en agosto pasado el senador vitalicio pactó un acuerdo secreto con la DC para abolir el 11 de noviembre como día festivo: unas sorprendidas UDI y Renovación Nacional [RN], ambos partidos pinochetistas, votaron fielmente lo que su amo les ordenaba sin habérselo consultado antes), si el Senado está en manos de la derecha que coarta cualquier proyecto o ley que no les satisfaga, si el Ejército nombra Comandante en Jefe Benemérito al delincuente justo después de su retiro, la sombra alargada de la nariz del *Pinocho* paira también sobre los partidos y gentes de izquierdas que en tiempos sufrieron su represión y lo

combatieron. El Partido Comunista (PC), único partido de la izquierda parlamentaria que no forma parte de la coalición gubernamental (Concertación), enfocaba toda su estrategia hacia la eliminación del dictador, dejando de lado otros objetivos como puede ser la transformación de la sociedad. Hoy es el único partido del Parlamento que aplaude la detención de Pinochet. Los tres partidos socialdemócratas de la Concertación, incluido el PS de Salvador Allende, gobiernan en alianza con la DC, que fue uno de los promotores del golpe de 1973. Tal alianza no puede ser menos que sospechosa. La reacción del PS ante la detención de Pinochet refleja el pensamiento y práctica de la DC: con las fuerzas armadas hay que pactar; no se puede uno enfrentar a ellas (aquí habría que diferenciar la actitud de socialistas que participan en el gobierno de la de parlamentarios y parlamentarias socialista, siempre más libres para la denuncia). Fue esa misma Concertación quien le concedió pasaporte diplomático a Pinochet con el único objetivo de protegerlo. De esta manera el juicio a un individuo se disfrazó de injerencia política; el nombre de Pinochet se equipara al de Chile.

Miopía general

En cuanto a la izquierda parlamentaria y a la sociedad en general, la sombra del dictador produce por un lado un terror paralizante y por otro una asunción de las tesis gubernamentales que son las de la derecha pinochetista y que expresa en un reciente artículo en la prensa española el que se pretende luchador antifascista Jorge Edwards: mirar hacia adelante, no despertar a los monstruos (militares) del pasado. El mismo Edwards se sitúa en un pretendido punto intermedio, acusando a la (según él) minoría de extrema derecha y a la minoría de la "izquierda revanchista" de promover los disturbios en Santiago posteriores a la detención. Ahora resulta que pedir justicia, que pretender recuperar la memoria, que perseguir los crímenes no es más que "revanchismo". Otros (Aristides Royo, embajador de Panamá en Francia) dicen literalmente que "tanto los que fueron sus partidarios como sus adversarios y sus enemigos aceptaron el borrón y cuenta nueva y respetaron el pacto de convivencia aunque tuviese sabor de cicuta". Gran mentira: son muchos los partidos, colectivos e individuos que nunca aceptaron ni aceptarán ese "borrón y cuenta nueva" impuesto por la derecha. Aunque se tratase de una sola persona, resulta indignante despachar con esa frivolidad su lucha jurídica de años para enjuiciar a los culpables. El miedo a lo militar parece haber producido una miopía general en el país. Un miedo real que nosotros, desde fuera, no nos atrevemos a criticar: la derecha, como en 1973, ha vuelto a crear un clima de desestabilización y amenazas cuyas consecuencias los chilenos y chilenas conocen muy bien y temen (amenazas y agresiones que también afectan a los ciudadanos e intereses españoles en el país austral).

La misma miopía ha llevado a otros (la derecha cubana de Miami, aunque la idea estuviese en la mente muchos otros) a presentar una denuncia por genocidio contra Fidel Castro. Y uno también se alegra del hecho, aunque sólo sea para que sean los propios tribunales los que echen por tierra, desde el punto de vista jurídico, tan absurdo. Lo peligroso de todo este asunto es que la denuncia de la violación de los derechos humanos se restrinja a la época de la dictadura. El neoliberalismo, afianzado en muchas partes del mundo gracias a la imposición de dictaduras amigas, hace un lavado de cara sacrificando a sus dictadores. Pero la represión

continúa, más sutilmente, eso sí; más “civilizadamente”. Pero cualquier desvío de la norma es implacablemente castigado. Decir que en Chile existe hoy en día una democracia es tan falso como es decepcionante condenar a Pinochet y darle carpetazo a todas las acusaciones pendientes contra el gobierno militar. La detención de Pinochet sólo tendría sentido si sirviese para que en Chile se abriesen verdaderos procesos contra todos los criminales de la dictadura.

Y para cambiar la sociedad. Genocidio es “imponer al grupo, deliberadamente, condiciones de vida encaminadas a producir su destrucción total o parcial” (Convenio de la ONU del 9/12/1948, 2º artículo): el pueblo mapuche, el aymara, el rapa nui, el atacameño, el kawéskar sufren desde hace siglos una imposición de condiciones de vida que los ha destruido o está destruyendo como grupos étnicos. Le llaman “chilenización”. Se intensificó durante la dictadura. Sigue vigente en la actualidad.

La crisis de la izquierda chilena

Alberte Pagán entrevista a Lilia Díaz

Lilia Díaz es la portavoz de las prisioneras políticas chilenas recluidas en la Sección Especial de Alta Seguridad del Centro de Orientación Femenina (SEAS-COF) de Santiago. Como miembros de los Comités de Solidaridad de Galiza conversamos con ella el pasado mes de agosto después de una estancia de 7 semanas conviviendo con las diversas organizaciones sociales chilenas, poco después de la visita de Hebe Pastor de Bonafini al país y durante los preparativos de las marchas de septiembre. A ella nuestro agradecimiento por los contactos facilitados y por la gestión de nuestras visitas a las cárceles de alta seguridad.

Alberte Pagán: Después de este tiempo de estancia en Chile, lo que más nos llama la atención es la profunda atomización que ha sufrido el movimiento revolucionario chileno y la falta de coordinación entre los diferentes grupos (en algunos casos personas) que trabajáis en Santiago; y esas ansias de protagonismo o de hegemonizar un movimiento que, a decir verdad, ni siquiera existe. ¿Cuál ha sido la evolución del movimiento revolucionario en estos ocho años de democracia? ¿Dónde están las raíces de tanta atomización?

Lilia Díaz: No quiero ser exitista ni tampoco pesimista, sino decir las cosas en su justa medida. Sin duda en este país los escenarios políticos cambian casi diariamente porque siempre hay nuevas propuestas y siempre hay gente en condiciones de trabajar. Yo creo que estamos en un buen período: la visita de la compañera Hebe de Bonafini [del 23 al 29 de julio de 1998] nos marcó a todos porque nos puso un objetivo demasiado alto, y en virtud de eso estamos trabajando. A pesar de esa atomización que mencionas, a veces nos juntamos a trabajar, como ahora en septiembre. Ha habido diversos intentos de coordinación.

La última coordinadora está en una etapa de discusión aunque quizá demasiado etérea: hay demasiado discurso, demasiada intelectualidad para huevadas tan simples. Y yo creo que por ahí pasa esto de la atomización, porque algunos están conceptualizando demasiado y no hacen nada, porque la práctica es lo que en definitiva importa y lo define todo.

En cuanto a la evolución de la izquierda chilena, habría que remontarse a finales de 1987, cuando el Partido Comunista, en particular, decide llamar a votar No [contra la continuidad de Pinochet como presidente en el plebiscito de 1988]. Hasta ese minuto el accionar armado en el país era bastante potente: se habían realizado acciones importantes, asaltos a cuarteles (en uno de ellos es asesinado el comandante José Miguel y la comandante Tamara del FPMR [Frente Patriótico Manuel Rodríguez]); se había realizado también, por parte del Frente, el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo [1986]; acciones todas que, de una u otra forma, a la izquierda en general le significaron ciertas condecoraciones y ciertos avances en la consecución de una democracia distinta, en la asimilación del concepto del poder para el pueblo, más que poder popular. El concepto de poder popular se retomó en la década de los 80, expresado en la resistencia a la dictadura, con territorios "liberados", gracias sobre todo al accionar de las organizaciones sociales, específicamente en poblaciones como La Legua o La Victoria. La resistencia al dictador y a sus políticos era, sin duda, un elemento tremendamente potente para aglutinar: aglutinaba a la izquierda, a los jóvenes, a los viejos, a sectores intelectuales... todos unidos en la consigna de acabar con el dictador.

Paradójicamente, con el triunfo del No, y ante la evidencia de que no se cometió un fraude que todos esperábamos, a los aparatos militares y partidos político-militares se nos descoloca el escenario. Y el mundo político de izquierda empieza a desperdigarse y a atomizarse. Empezamos entonces a trabajar por tratar de rescatar un poco la memoria, de avanzar en esta construcción del poder para el pueblo, pero nos damos cuenta de que es ya imposible: nos seguimos desperdigando y abriendo y la izquierda, con el triunfo del No, sufre una de sus peores crisis.

A. P.: ¿Cómo afecta esta crisis a los partidos político-militares?

L. D.: Esta debacle profunda provoca múltiples divisiones internas. El FPMR, que fue uno de los aparatos militares creados por el PC, se transforma en partido y se divide. Su transformación en partido (en 1987, después del atentado al Pinocho) fue sin duda alguna un avance. Empiezan a hacer una revisión de la lucha armada para abrir un período de ajuste a las nuevas circunstancias. En este período de ajuste el Frente vuelve a sufrir división (Destacamento Raúl Pellegrín), en el MIR [Movimiento de Izquierda Revolucionaria] se van creando nuevas instancias armadas como el EGP-PL [Ejército Guerrillero de los pobres-Patria Libre] y el MAPU-Lautaro [Movimiento de Acción Popular Unitario-Lautaro] continúa con su accionar militar, empezando principalmente a ajusticiar *pacos* [policías] en las calles como representantes de las fuerzas represivas. Y vuelven, entrado el 90, a caer nuevos prisioneros políticos. Porque aquí los presos se dividen en pre-90 y post-90, o de la dictadura y de la democracia. Cuando se empiezan a llenar

nuevamente las cárceles de compañeros (en su mayoría militantes del Lautaro, que era el único partido político-militar que había seguido la misma línea desde la época de la dictadura) el gobierno resuelve rápidamente la situación de los presos de la dictadura, liberándolos; en las condiciones que sean. El MIR deja de operar, aparte de un par de acciones a lo largo del 90. El Frente decididamente empieza a buscar otro camino. Y el Destacamento Raúl Pellegrín también empieza un accionar militar en "democracia".

A. P.: Y en cuanto al movimiento social ¿se produce la misma disgregación? ¿Cuáles son sus reivindicaciones?

L. D.: El movimiento social empieza a desperdigarse. Se empieza a perfilar un nuevo sujeto social, que se da cuenta de que el enemigo ya no es el dictador. Empezamos a buscar enemigos por todas partes, a tratar de articularnos en virtud de un enemigo concreto. Y empezamos a criticar el verticalismo de las estructuras político militares y las estructuras verticales de las organizaciones sociales, y se produce en nosotros una crisis profunda. Después de hacer todo este análisis nos damos cuenta de que, efectivamente, la lucha de clases es absolutamente válida, de que el verticalismo es una herramienta innecesaria y de que lo que hoy por hoy nos recorre a todos, con o sin experiencia militante, con o sin experiencia armada, con o sin formación política, con o sin concepción de pueblo, es que el verticalismo no sirve para nada. Y empezamos a trabajar en la concepción de colectivo, de un colectivo que hace cosas, que empieza a organizarse, que empieza a creerse pueblo en condiciones de crear poder popular; o sea, en la concepción de clase. Y en la concepción de asumir a los presos políticos, a los detenidos-desaparecidos y a los ejecutados políticos como patrimonio nacional. Es decir, que si bien hasta ahora la democracia había reducido la problemática de derechos humanos exclusivamente a la resolución de los casos emblemáticos de violación de los derechos humanos, ahora el pueblo y sus organizaciones incipientes (en su casi mínima expresión) consideramos que tanto los detenidos-desaparecidos, como los ejecutados políticos, como los prisioneros y prisioneras políticos, son patrimonio nacional y en virtud de eso nos estamos movilizándolo y nos estamos organizando. El concepto de derechos humanos no sólo se puede reducir al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, sino que es algo que nos atañe absolutamente a todos.

A. P.: Chile es un país que pretende seguir el modelo de las democracias parlamentarias neoliberales occidentales: cierto bienestar social, cobertura de (ciertas) necesidades mínimas, ocultación de la miseria y propaganda capitalista que hace que la población acepte la represión como algo natural (para combatir la "delincuencia") o denomine "terroristas" a las y los que para vosotros son "presos políticos". La crisis asiática que está afectando a Chile vino a echar por tierra este "sueño chileno". ¿Pero no crees que ese aparente bienestar social es la mejor fórmula para abortar cualquier brote revolucionario o levantamiento popular, como pasa en Europa? ¿O quizá haya que cambiar de tácticas para luchar contra el modelo?

L. D.: La economía de libre mercado empieza ya a aplastar al nuevo sujeto social de los 90, sujeto que está de alguna manera inmerso en el sistema; nos empieza a

exigir. Nos encontramos con tipos absolutamente desencantados de la vida. Y casi al final de esta década nos damos cuenta de que el discurso de los 70 es tan válido ahora como entonces. Y en virtud de eso estamos trabajando.

Aquí hubo un ajuste económico en salud, en educación, en Mideplán [Ministerio de Planificación] y en áreas importantísimas del quehacer nacional. El gobierno no es capaz ni siquiera de mantener sus propias promesas, hechas a sí mismos, ni siquiera al pueblo, de mantener su agenda social intacta. Con esta crisis asiática se genera la necesidad de ahorrar plata, pero el gobierno ahorra plata en sectores que son vitales, como es la salud, la educación o Mideplán. La plata que se le sacó a Educación significa que no se hicieron más colegios, que hubo profesores que no fueron contratados, que hay una cantidad de niños que no están recibiendo una educación de calidad, que el proyecto P-900, que es el proyecto de las 900 escuelas más pobres, no está trabajando en su punto máximo. Significa que estamos haciendo en Educación el esfuerzo mínimo, porque económicamente no se puede hacer más. Hay una cantidad de plata que se le resta a áreas centrales de la agenda del gobierno que sin duda recorre en este minuto las conciencias del pueblo pobre. Aquí aún se tardará en disfrutar de un bienestar social apaciguador de las conciencias.

Y a nivel político tenemos a *Pinocho* en el senado. El 11 de marzo (Pinochet asumía su sillón vitalicio en el senado) de este año hubo una movilización social tremenda, donde nos encontramos con que trabajadores, estudiantes, secretarías, oficinistas, [estudiantes] secundarios, todo el mundo estaba protestando contra el dictador. Sin embargo, Pinochet sigue ahí, y aún no se puede decir que es culpable de crímenes de lesa humanidad en términos de autor intelectual. Y ahí se toma días atrás la libertad de rematar [subastar] sus pertenencias. En este país hemos llegado a niveles donde la inmoralidad raya con la estupidez. Es inmoral siquiera dar en las noticias el remate de los objetos de Pinochet.

A. P.: En teoría las ganancias del remate se invertirían en becas y ayudas. Aunque supongo que es una manera de suavizar la obscenidad del acto.

L. D.: Esa es la cuestión. Aquí el gobierno siempre pretende justificar el accionar militar. Siempre hay una neutralización de cualquier opinión disidente contra el accionar de los cuerpos militares de este país. Siempre hay una justificación para los cuerpos uniformados, léase carabineros, fuerza aérea, marina, milicos, todos. En este país se ha llegado al extremo de tener que definir qué es "pertrecho militar". No se puede entender por "pertrecho militar" permufes o bebidas alcohólicas, y sin embargo la Fuerza Aérea fue capaz de importarlos como pertrechos militares. La moralidad de las cúpulas superiores de los cuerpos armados es una moralidad absolutamente cuestionable que el gobierno no se atreve a cuestionar. ¿En virtud de qué? En virtud de acuerdos, de esta inmunidad que se le ha ofrecido a todo uniformado y a todo miembro de los aparatos represivos. Hoy se ha presentado de forma voluntaria un torturador de la CNI [Centro Nacional de Informaciones, servicio de inteligencia de la dictadura] a declarar ante el ministro [Hugo] Dolmestch, que es el ministro que lleva la *operación Albania*, que fue una de las operaciones más terribles que se vivieron aquí en Chile a razón del atentado a Pinochet. En ella murieron doce combatientes del Frente: acribillados, ajusticiados y asesinados porque el dictador había salido herido en una mano. Y se presentó de forma voluntaria. Ni fueron carabineros ni investigaciones

quienes lo entregaron. ¿En qué país del mundo suceden estas cosas?: sólo en Chile, estoy casi segura. Aquí no hay órdenes de arresto para nadie, no hay órdenes de arresto pendientes para los torturadores ni para los integrantes de los servicios de inteligencia. Y aún así en este país es el Partido Socialista el que vuelve en esta democracia a establecer el saqueo, el soplónaje, el bombeo, como decimos nosotros. El bombeo significa la infiltración de algún ex-militante o de alguien nuevo en organizaciones sociales, populares o partidos de izquierda. Y esta persona informa cada cierto tiempo a sus superiores que son los represores. Paradójicamente, este bombeo lo institucionaliza el Partido Socialista, que dice defender sobre todas las cosas la figura de Salvador Allende y está contra Pinochet. Sin embargo, tiene una Oficina Nacional de Seguridad responsable de muchos casos de represión. La represión aquí sigue igual, las calles están llenas de cámaras, todo está lleno de cámaras. Las Cárceles de Alta Seguridad son cámaras, en el fondo. En algún tiempo tuvieron hasta micrófonos.

A. P.: ¿En la Cárcel de Alta Seguridad [donde están los presos políticos]?

L. D.: Sí, la CAS tenía micrófonos. En la SEAS no los tuvieron porque en realidad era muy reducido el espacio y además tiene una acústica que te permite escuchar lo que se dice de un lado a otro. Siempre se sabe de lo que se habla.

Hace seis semanas el escenario era bastante contradictorio para nosotros como izquierda, porque no había nada en el ambiente, no se sentía nada, no había organización, no se hacían cosas. Algo ha cambiado. Debe de ser porque se acerca septiembre. Ya hemos conversado muchas veces con nuestros compañeros sobre que, si es necesario que nos reconstruyamos de verdad, sea tal vez necesario empezar por preguntarnos por qué contestamos a determinados estímulos, por qué contestamos al 11 de marzo cuando asumió Pinochet como senador vitalicio o por qué contestamos a septiembre.

A. P.: ¿Esta reactivación del movimiento popular sucede todas las vísperas de septiembre, o ha habido una evolución en la organización de la lucha?

L. D.: Este año ha sido especial, quizá porque Pinocho está en el Senado y porque se está discutiendo en la Corte Marcial la no aplicación de la ley antiterrorista a los presos políticos, porque nos hemos dado cuenta de que el verticalismo no sirve para nada. Ha sido muy especial porque queremos encontrarnos y reconocernos como revolucionarios y como luchadores sociales. Y queremos reconocernos en los presos y en los detenidos-desaparecidos y en las mujeres y en los obreros: en nuestra clase.

A. P.: ¿Qué ha sucedido este año para que os diérais cuenta de que el verticalismo no os servía? Habéis tenido muchos años para cambiar de estilo.

L. D.: Sí, yo creo que lo que ha ocurrido es que desde 1973 hasta ahora siempre habían existido las sobreestructuras. Y siempre se demostró que cada cada vez que se tiraban líneas, que se daban órdenes de arriba para abajo, al llegar abajo la apatía para cumplirlas iba en forma ascendente. Creo que el fracaso de la mayoría de los proyectos que fueron generados desde las cúpulas y que las bases no asumieron nos llevaron a darnos cuenta de que el verticalismo es una huevada inútil. Aquí mientras no trabajemos todos hombro con hombro, tirando *p'alante*, no va a funcionar.

A. P.: En diferentes conversaciones observé cierta sacralización de la lucha armada: quien no haya cogido nunca un arma parece que no es aceptado ni aceptable para la lucha. ¿Crees que en estas nuevas circunstancias políticas la lucha armada sigue siendo esencial en la lucha contra el sistema o es un método que ha perdido su eficacia para generar cambios?

L. D.: Creo que tienes razón en tu observación. Pero la gente de la izquierda, por muy mediocre que sea, alguna vez tuvimos que coger un arma, sin antes haberlas conocido. Tuvimos que hacerlo y estuvimos en esa alternativa y nos creímos esa alternativa; y yo me la sigo creyendo. Yo sigo creyendo que una de las alternativas que más peso tiene en virtud de cambiar el sistema es la lucha armada. Ahora, creo que para llevar a cabo una lucha armada efectiva tienes que crear un nuevo sujeto social, un revolucionario real, no circunstancial, no que se enfrente en época de crisis o conflicto. Tiene que ser un revolucionario integral. Y en esa búsqueda estamos. Aquí nadie tiene la panacea ni la respuesta de nada. Chile es un país que no tiene, ni jamás ha tenido, cultura de guerra. Hoy por hoy los pwenche están peleando [reivindicando las tierras que anegará la presa de Ralco construida por Endesa en el Alto Biobío] porque en realidad ya les llegó a las pelotas. Porque no pelearon ocho años atrás, cuando empezó a construirse la primera presa, Pangué. Entonces, como te decía, tenemos que preguntarnos cuál es nuestra esencia, qué hace que nos desencantemos y seamos contestatarios. Y esa es una respuesta que tenemos que ir buscando. Por qué la debilidad en mantener una organización social, por qué la falta de compromiso, por qué la abulia en asumir que los presos políticos en democracia son los mismos presos políticos que en dictadura; y jurídicamente los abogados, ante la tercera sala de la Corte Marcial, están alegando como alegaban por los presos de la dictadura. Es exactamente el mismo tratamiento jurídico. ¿Por qué la izquierda tradicional, entonces, no los asume como prisioneros políticos? El pueblo tiene que asumirlos como luchadores sociales y revolucionarios. Porque efectivamente eso son, gente que en su mayoría viene del seno del pueblo, de la miseria, de la pobreza y la marginación. ¿Por qué a los *miristas* y a los comunistas les cuesta entenderlo? A mí me da mucha pena escuchar decir que los presos políticos son terroristas. Porque, jurídicamente inclusive, no son terroristas. Y eso se ha demostrado en los alegatos que hacen los abogados, basados en investigaciones de aparatos de inteligencia de carabineros. El Lautaro, por ejemplo, no está considerado un grupo terrorista. ¿Qué dice la ley antiterrorista en el artículo uno? Dice más o menos: "Terrorista es aquella persona que realiza acciones que infunden terror en la población". Ningun organismo o estructura armada de la izquierda pretende sembrar terror en la población porque su interés es precisamente trabajar en la población y con la población. Nosotros hemos sido tajantes como representantes de los presos con respecto a eso: primero que todo los presos son presos políticos, y me atrevo a decir que el gobierno, gendarmería incluida, los reconoce como políticos de forma tácita, aunque no explícita.

A. P.: Tanto el PC como el MIR se han desmarcado de la reivindicación de la libertad de los presos políticos. ¿Tenéis el apoyo político de algún otro tipo de organización al exterior de las cárceles?

L. D.: Nadie nos ayuda, nadie nos ofrece nada. Aquí nosotras nos batimos como podemos. No tenemos ningún apadrinamiento como espacio de representación de los presos. Empezamos a hacer esta huevada solas, de puro tozudas y porfiadas que somos, de puro creernos el discurso de que los presos son presos políticos. Ni organismos de derechos humanos ni nadie nos ha apoyado. Y hoy, sin embargo, llamamos por teléfono y nos atiende el ministerio de justicia, y nos atiende Jaime Castillo Velasco [presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos] con el cual tenemos una relación bastante expedita. Ése es nuestro quehacer: denunciarnos, exigimos, pedimos al gobierno respuestas. Yo creo que terminado este circuito de exigencias en los diferentes lugares quedará claro que se trata de un conflicto político que el gobierno (y no el aparato policial, ni tampoco el pueblo) tiene que resolver. También sabemos que el gobierno de la Concertación no va a sacar a sus presos; porque son sus presos: ellos desarrollaron las políticas de seguridad y los aparatos represivos para encarcelarlos: sin duda alguna no los van a sacar en libertad.

A. P.: ¿Estáis esperando entonces por otro gobierno más dialogante?

L. D.: No es eso. Creemos, entre comillas, que otro gobierno puede solucionar el conflicto. Sabemos que éste no va a solucionar nada. Habría que ver la propuesta programática de los otros partidos.

A. P.: ¿Pero qué otro gobierno sería posible en Chile, aparte de los socialistas? El PC no tiene muchas posibilidades de llegar a gobierno a corto plazo y tampoco parece tener mucha voluntad política de involucrarse en el tema de los presos.

L. D.: Quizá; no lo sabemos. En Chile los escenarios políticos cambian de la noche a la mañana. Si sale elegido Ricardo Lagos [candidato socialista de la Concertación para las elecciones de 1999] como presidente de la república, no va a tener sólo una oposición: va a tener a la Democracia Cristiana y a la derecha de oposición. Y aún encima a nosotros. Y nosotros somos cada día más fuertes: nos estamos armando, estamos tratando de hacer cosas, nos estamos reconociendo. Estamos tratando de levantar un discurso unitario. Hemos aprendido a aceptar la diversidad. El que no quiera estar en el discurso unitario, mala suerte, que siga con su historia.

San Joaquín, Santiago de Chile, 25 de agosto de 1998